

## CRONICA DEL MES OCTUBRE

Ernesto Cruz Alfaro

Después de 44 días de cautiverio de la hija del presidente y de una relativa paralización de la gestión estatal, el FMLN liberó el 24 de octubre a Inés Guadalupe Duarte y Ana Cecilia Villeda, en el marco de un acuerdo amplio de canje en virtud del cual fueron también liberados 23 alcaldes y funcionarios municipales, a quienes la guerrilla secuestró entre febrero y septiembre del presente año, a cambio de la liberación, por parte del gobierno de 22 presos políticos y de la concesión de un salvoconducto para que 101 combatientes heridos y lisiados de guerra del FMLN pudieran viajar al extranjero a recibir atención médica especializada.

El proceso de negociaciones que precedió los acuerdos de canje fue tenso y dificultoso. De modo especial, en el fin de semana del 12 y 13 de octubre, la oposición de importantes sectores de la Fuerza Armada a las exigencias de los secuestradores estuvo a punto no sólo de romper el proceso de negociación, sino incluso de generar un conflicto mayor entre militares y civiles en el gobierno. La situación llegó al punto de que el alto mando castrense se vio forzado a realizar una reunión privada el 13, la cual se prolongó hasta el día siguiente, ante la dificultad de los oficiales cercanos al presidente y favorables a la negociación para persuadir a sus colegas de la inconveniencia de romper totalmente las conversaciones. Al parecer, fueron estas tensiones al interior de la Fuerza Armada y los rumores de golpe

de Estado derivados de ellas, y no nuevas amenazas guerrilleras a la familia de Duarte, lo que motivó la salida a Estados Unidos de dos hijas y cinco nietos del mandatario, a bordo de una aeronave del comando sur de Estados Unidos; así como el "inexplicable" comunicado emitido por el embajador Corr en apoyo "a El Salvador, al sistema de democracia constitucional, y al presidente José Napoleón Duarte, quien fue elegido por el pueblo salvadoreño para gobernarlo."

Una vez superado este momento crítico, entre el 19 y el 21 surgieron nuevas dificultades, las cuales obligaron a los mediadores eclesiásticos y a una misión gubernamental a viajar a Panamá para discutir con representantes del FMLN las diferencias en torno a las condiciones y modalidades del canje, cuyo acuerdo fue firmado finalmente por las partes en la madrugada del 23. Suscribieron el acuerdo el Lic. Julio Adolfo Rey Prendes y el Dr. Abraham Rodríguez, por la parte gubernamental; y Salvador Samayoa (FPL) y Mario Aguiñada (FAL), en representación del FMLN, ante la presencia de Monseñor Rivera y del Padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, quienes actuaron como mediadores y testigos.

La operativización del canje se inició en la mañana del 24, con la transferencia de la comandante Nidia Díaz de la Policía Nacional a la cárcel de Mariona; así se pudo reunir con otros 19 reos políticos recluidos en ese penal, con la combatiente Rosa Elena Romero, trasladada desde la

cárcel de mujeres, y el piloto costarricense Julio Romero Talavera. Este último fue entregado al embajador de Costa Rica y al canciller Castillo Claramount, y partió a su país al medio día. Los 21 reos restantes fueron entregados a las 11:30 al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a los representantes diplomáticos de Panamá, Colombia y México. De ellos, 18 abordaron un camión de CICR y partieron hacia Tenancingo, para incorporarse nuevamente al frente de guerra. Los tres restantes —Nidia Díaz, Santiago de Jesús Rauda y el médico hondureño Marcelino Reyes Gómez—, junto con 71 lisiados de guerra del FMLN, se dirigieron al aeropuerto internacional de Comalapa y partieron hacia Panamá a las 21.20 horas a bordo de un avión de la fuerza aérea panameña. Dos horas después, un segundo contingente de 30 lisiados partió hacia México a bordo de una aeronave de la fuerza aérea mexicana.

Una vez que el FMLN se hubo cerciorado de que los reos políticos y los lisiados de guerra habían sido entregados al CICR, al cuerpo diplomático y los representantes de la Iglesia, procedió, en un primer paso, a liberar a las secuestradas, quienes fueron recibidas en Tenancingo, en presencia de Monseñor Rivera y delegados del CICR, por los embajadores de México, Francia y Alemania Federal, y conducidas en un vehículo del CICR a Santa Cruz Michapa, donde las aguardaba un helicóptero de la CEL para trasladarlas a San Salvador. Luego de ello, procedió a liberar a 23 alcaldes y funcionarios municipales —dos de ARENA, uno del PCN, uno de PAISA y 19 del PDC— capturados entre febrero y septiembre del presente año. Según Radio Venceremos, los prisioneros fueron liberados entre 4:00 y 5:00 p.m. en diversos puntos del país. Sin embargo, no obstante la dispersión de los lugares donde se llevaron a cabo los diversos canjes, la operación global transcurrió sin mayores incidencias, excepción hecha de un enfrentamiento entre patrulleros de la defensa civil y una columna guerrillera quienes chocaron en las inmediaciones del cantón Guadalupe, jurisdicción de Chirilagua (San Miguel), así como de otro choque armado menor cerca de El Paisnal.

Una vez resuelto el secuestro y evaluados sus efectos políticos de modo fundamentalmente favorable a su causa, el FMLN decidió responsabilizarse abiertamente de la operación, denominada "Basta ya al terror, las torturas y las desapariciones en las cárceles duartistas." Según Radio

Venceremos, el secuestro desenmascaró la descomposición del sistema judicial salvadoreño, ya que de los 22 prisioneros políticos que Duarte aceptó canjear por su hija, "sólo uno había sido remitido a los tribunales de justicia." Por su parte, en entrevista ofrecida al arribar a Panamá, Nidia Díaz declaró que "esta situación de canje producido y controlado por el FMLN demuestra el poder político y militar que tiene el FMLN," al tiempo que denunció que el conflicto se había agudizado "debido a una mayor injerencia de Estados Unidos, pero las posibilidades de triunfo son nuestras, debido al desgaste del ejército, la organización del pueblo y la economía de guerra desarrollada por el FMLN. Por nuestra parte hay grandes perspectivas, porque nos hemos extendido por casi todo el territorio nacional."

Frente a este tipo de valoraciones, el presidente Duarte respondió que "la evacuación de los lisiados es un acto humanístico del gobierno," mientras que Rey Prendes enfatizó que el FMLN "no puede hablar de 'beneficios' para su causa, porque hoy se han evidenciado como terroristas, como secuestradores, y en cambio el gobierno ha tenido un gesto humanitario al permitir la salida de los lisiados de guerra." Tales declaraciones fueron acompañadas por afirmaciones de que "el gobierno está hoy más fuerte que nunca" y por desmentidos sobre las tensiones inducidas por el incidente en la Fuerza Armada, que atribuían a las discrepancias castrenses un "carácter personal, no insitucional."

Todo ello, sin embargo, no bastó para poner los flancos gubernamentales a cubierto de los ataques de la derecha, la cual desató una intensa campaña publicitaria en contra del "entreguismo" de la patria mostrado por el gobierno en el curso de las negociaciones para la liberación de Inés Duarte. Incluso ARENA, que por boca del mayor D'Aubuisson había apoyado inicialmente las gestiones del mandatario para liberar a su hija, desplegó una serie de "recordatorios" cuyo contenido fundamental apuntaba que "primero está la patria y después los intereses personales" y que "cuando les toca afrontar situaciones difíciles a los prepotentes en el poder, la Constitución es pisoteada."

Cada vez más divorciado de las aspiraciones del pueblo, el gobierno careció de la suficiente base social de apoyo para enfrentar los ataques de la derecha. Lejos de aprovechar el secuestro de Inés Duarte como un momento propicio para transformar la solidaridad humana mostrada al

presidente en un respaldo primariamente político, la gestión democristiana siguió descuidando los reclamos populares en demanda de mejores condiciones de vida y enfrentando con medidas poco afortunadas las luchas reivindicativas del movimiento de masas. A las denuncias de las federaciones de cooperativas de la reforma agraria (FECORAO, FECORASAL, FECORACEN) sobre la incapacidad del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) para resolver el problema de la comercialización de sus productos, se sumaron pronto las protestas de los empleados públicos y municipales por la emisión del decreto 162, aprobado el 17 de octubre en la asamblea legislativa por 44 votos del PDC y PCN. El decreto establece reformas al inciso segundo del artículo primero de las disposiciones generales del presupuesto, facultando al ejecutivo para efectuar traslados de empleados públicos de una dependencia a otra, en cualquier lugar del país o del exterior, por un plazo de 12 meses, el cual puede ser prorrogado. Inmediatamente después de su aprobación, la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) denunció que las reformas contenidas en el decreto pretendían “descabezar a las organizaciones gremiales y condenar a la muerte y al exilio a los compañeros trabajadores,” e incorporó su derogación como una demanda fundamental más de su plataforma reivindicativa, al tiempo que decretó un paro indefinido de labores desde el 21 de octubre. Dos días después, la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños ANDES 21 de Junio decretó también paro de labores a nivel nacional en protesta porque el decreto “viola el derecho a la estabilidad del trabajador contemplado en la Ley del Servicio Civil y la Ley de Profesión del Maestro.” También solicitaron el veto del ejecutivo al decreto la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), la Central de Trabajadores Democráticos (CTD), la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) y otras organizaciones laborales.

Especial relevancia cobró la huelga de AGEMHA, cuyos efectos expansivos pronto alcanzaron otras dependencias del sector público. En solidaridad con sus demandas, el Comité Primero de Mayo convocó el 28 a una serie de acciones de respaldo, en respuesta a lo cual varias instituciones públicas suspendieron total o parcialmente sus labores ese mismo día, entre ellas la lotería nacional, el ministerio de educación, la administración Nacional de Telecomunicaciones

(ANTEL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Dirección General de Correos, el Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos (INPEP) y diversas instituciones bancarias (Banco Salvadoreño, Banco de Crédito Popular, CREDISA, AHORROMET), etc.

La respuesta gubernamental al paro de AGEMHA y a los paros solidarios no suavizó la intransigencia mostrada frente a las demandas laborales de los meses anteriores. En concreto, el ministro de hacienda manifestó que no tenía “nada que negociar con los huelguistas” porque “éstos hacen más daño que los que destruyen postes o queman buses;” y advirtió que a partir de ese día se sancionaría de acuerdo a la ley a los empleados que no se presentaran a sus labores, “usando todos los mecanismos legales para descontar y, en última instancia, despedir a quienes no laboren; y si la mayor parte de trabajadores sigue acuerpando el movimiento, hacienda contratará nuevo personal.” El penúltimo día del mes, AGEMHA denunció la militarización de las instalaciones centrales y puestos fronterizos de hacienda, lo cual el titular de la cartera justificó como “colaboración de la Policía de Aduanas para mantener el orden en las distintas dependencias.”

En correlación con el desgaste político que supuso la negociación con el FMLN para la liberación de Inés Duarte, y las respuestas desafortunadas a las demandas del movimiento laboral, el gobierno democristiano recibió durante octubre golpes particularmente fuertes también en el terreno militar. El más contundente de ellos fue el ataque a las instalaciones del Centro de Entrenamiento Militar (CEMFA) de La Unión, que el propio gobierno interpretó —si bien no públicamente— como la acción militar más importante realizada por el FMLN desde el ataque al Cerrón Grande en junio de 1984. La operación, denominada “Vivan los cinco años de lucha patriótica y anti-imperialista,” se efectuó en la madrugada del 10 de octubre, con ocasión del quinto aniversario de la constitución formal del FMLN. Según Radio Venceremos, el objetivo inicial del ataque “consistía en el aniquilamiento o captura de 10 asesores norteamericanos y del coronel Cerna Flores, jefe del CEMFA,” quienes el día del operativo, sin embargo, se encontraban en La Unión, por lo que “el objetivo pasó a ser el cuerpo de clases, cadetes instructores y la tropa.” La emisora agregó que las unidades guerrilleras, dirigidas por los comandantes Jorge

Meléndez y Mario Alberto Mijango, causaron a la Fuerza Armada un total de 235 bajas (80 muertos y 155 heridos), entre efectivos de los batallones Arce y Jiboa, así como del cuartel San Carlos, Sensuntepeque y Gotera; destruyeron dos barracas y dañaron varias más. Finalmente, informó que con la operación del FMLN consideraba "abierto el teatro de operaciones en la zona sur de La Unión."

Por su lado, el presidente Duarte explicó que el ataque había sido ejecutado "por un número aproximado de 300 terroristas" y que "el número mayor de bajas de la Fuerza Armada (2 oficiales y 40 elementos de tropa muertos, y 68 soldados heridos) se produjo por el fuego de lanzacohetes y cañones de 90 mm, que hicieron impacto donde dormían jóvenes reclutas." Sin embargo, agregó, "el ejército reaccionó inmediatamente, rechazando a los terroristas," a quienes causó por lo menos 10 muertos. Según precisó COPREFA en relación a esto último, tras el ataque, el cual se prolongó por espacio de dos horas, acudieron tropas del Destacamento Militar No. 3, así como refuerzos aerotransportados de la Tercer Brigada de Infantería, de San Miguel, quienes, junto a la guarnición del CEMFA, obligaron a los rebeldes a replegarse con rumbo sur, hacia el volcán Conchagua, y poniente, por el cantón El Pilón. En una versión más detallada, el jefe de operaciones del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, informó que los atacantes pertenecían al ERP y procedían en su mayor parte del cerro "El Monito," de Jucuarán, y de otros lugares de Morazán y San Miguel, y que pretendían ocupar las instalaciones, destruir la base y capturar a los asesores norteamericanos asignados al CEMFA, en el cual se encontraban 2.200 efectivos. Al mismo tiempo, retomó las versiones de que en el ataque hubo "infiltración subversiva" de características similares a la que se dio en la Segunda Brigada de Infantería, en Santa Ana, en enero de 1981, y en la Cuarta Brigada, en El Paraíso, en enero de 1983. Informó además que los rebeldes usaron ametralladoras, lanzagranadas, cohetes RPG-2 y fusilería, y sufrieron un 24 por ciento de bajas, entre ellas 10 muertos y 40 heridos, quienes fueron evacuados a bordo de un bus y un *pick-up* decomisados en El Pilón. Aseguró igualmente que entre los muertos del FMLN se encontraban tres comandantes quienes dirigieron el ataque, dos de ellos de las fuerzas especiales de la guerrilla. Finalmente, informó del decomiso de gran cantidad de TNT, 6

fusiles y otros pertrechos de guerra abandonados por los atacantes.

Además del ataque al CEMFA, otra importante muestra del despliegue de fuerza evidenciado por el FMLN durante el mes lo constituyó el undécimo paro general del transporte, el cual se prolongó por casi dos semanas (el más prolongado de todos los paros del transporte decretados hasta la fecha por el FMLN). Según fuentes oficiales, en el curso del paro fueron averiados o destruidos unos 75 vehículos, murieron 8 civiles y 20 fueron heridos por ametrallamiento; mientras que Radio Venceremos estimó en más de 21 millones de dólares las pérdidas causadas al gobierno.

Contrariamente a como en algún momento sugiriera la prensa, las negociaciones para la liberación de Inés Duarte no supusieron un corte en la actividad militar del gobierno. De hecho, la Fuerza Armada inició el mes con un operativo de gran envergadura al norte del río Torola, en Morazán, el cual contó con la participación de entre 3 y 4.000 efectivos respaldados por aproximadamente 30 naves aéreas, entre helicópteros UH-1H y *Hughes* 500, aviones A-37, O-2 y C-47, así como por unidades de artillería. Durante los 19 días que duró el operativo, la Fuerza Armada lanzó cerca de 10 toneladas de explosivos en forma de 60 morteros de 105 mm y bombas de 200 y 500 libras. Fuentes castrenses informaron haber causado cerca de un centenar de bajas al FMLN y desmantelado varios campamentos, al tiempo que admitieron haber sufrido más de 10 bajas y que los rebeldes habían dañado un helicóptero.

En otro operativo, iniciado el 19 de octubre en una extensa zona de Chalatenango, participaron unos 2.000 efectivos pertenecientes a los batallones Atlacatl y Belloso y a la Cuarta Brigada de Infantería. Igualmente, la Fuerza Armada mantuvo operaciones de regular envergadura durante todo el mes en diversas zonas de San Vicente y Usulután, sobre todo a partir de la captura del coronel Omar Napoleón Avalos, ocurrida el 26 no muy lejos del volcán Chinchontepec. El día anterior, la Fuerza Armada había iniciado un fuerte operativo entre el cerro de Guazapa y El Paisnal. Al parecer, la operación se realizó en coordinación con otros operativos en áreas de San José Guayabal y Tenancingo, departamento de Cuscatlán, y en el noroeste de Cabañas hasta las riberas de la presa del Cerrón Grande, e involucró tropas de la Primera Brigada de Infantería,

el Destacamento Militar No. 5 y de los batallones Atlacatl y Aerotransportado.

En total, la Fuerza Armada afirmó haber causado durante octubre 237 bajas al FMLN (99 muertos y 138 heridos), además de 238 guerrilleros capturados; y reconoció haber sufrido 447 bajas: 82 muertos y 365 heridos. Por su parte, el FMLN aseguró haber causado 825 bajas al ejército, 272 de ellas durante el ataque al CEMFA, y las restantes por minas y emboscadas. Asimismo, informó haber dinamitado alrededor de un centenar de postes y cerca de 50 torres del sistema de energía, provocando largos apagones en 11 de los 14 departamentos del país.

En este clima de renovados despliegues de fuerza militar por parte de los dos bandos en conflicto, el primer aniversario del encuentro de La Palma puso de manifiesto con mucha nitidez la polarización de fuerzas en torno a las perspectivas de una solución dialogada a la guerra.

Como era de esperarse, el incidente de La Unión y el propio secuestro de Inés Duarte brindaron a la derecha un pretexto fácil para salir nuevamente a defender sus posiciones más agresivas en relación al diálogo. Según un comunicado difundido el 15 de octubre por el Frente Femenino Salvadoreño, "lo ocurrido en el campo militar después del inexplicable ataque a esa importante base que es el CEMFA y las cuantiosas bajas sufridas por nuestras tropas, han abierto nuevas, profundas y severas interrogantes;" mientras que el Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (ISEPES) reiteró una vez más que para resolver el conflicto "no queda más camino que la victoria militar sobre los comunistas," señalando al propio tiempo que "todo aquél que no ansie el triunfo inmediato de nuestra fuerza armada es cómplice, por acción y omisión, de la conjura subversiva." El ataque al CEMFA conmovió también a los diputados de las diversas fracciones opositoras, quienes expresaron que el suceso "merece especial atención del ejército" y debía motivar "al Alto Mando a tomar medidas preventivas." Sometida a estas presiones, pareció resquebrajarse la "unidad monolítica" de la Fuerza Armada de que hablara el general Vides Casanova el 7 de mayo, con ocasión del día del soldado, y salieron a relucir nuevamente las reservas de importantes sectores castrenses frente al diálogo.

Igualmente, el secuestro de Inés Duarte y Ana Cecilia Villeda y el ataque al CEMFA, dieron más pábulo a las objeciones gubernamen-

tales sobre el carácter "táctico" del diálogo propuesto por el FMLN-FDR. Al comentar dichos acontecimientos, Rey Prendes manifestó que los mismos podrían obligar al gobierno "a revisar las reglas del juego en la humanización del conflicto," mientras que el presidente Duarte declaró que "la oferta sería que hice en La Palma fue un buen paso en la búsqueda de la paz, que los terroristas han tratado de distorsionar, creando todo un ambiente de guerra y de secuestro, de muerte y de acciones contrarias a lo fundamental que planteaba yo en La Palma," todo lo cual mostraba que "los grupos alzados en armas no desean la paz, sino que quieren hacer la guerra."

En otra línea de posiciones, las fuerzas sociales favorables al diálogo aprovecharon el aniversario de La Palma para reafirmar sus planteamientos. Junto a organizaciones cuyas presiones en favor del diálogo venían de bastante atrás, como ANDES 21 de Junio, el Comité Cristiano Pro-Desplazados (CRIPDES), la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y los comités de madres y familiares de presos, desaparecidos y asesinados políticos, o incluso organizaciones presumiblemente cercanas al PDC, como la Unidad Popular Democrática (UPD) y el Comité permanente por la paz, la democracia y la justicia social en El Salvador, se constituyeron nuevas instancias organizativas, como el Comité por el diálogo y la paz, y se ganó aparentemente un apoyo más decidido de fuerzas políticas que un año antes no veían con tan buenos ojos la solución dialogada del conflicto, como el PCN, cuyo foro "Alternativas para la paz" generó una discusión amplia, seria y provechosa en orden a abrir canales de opinión pública favorables a la pacificación política del país. Premisa fundamental del clima de opinión generado por todos estos planteamientos lo fue la convicción de que los interlocutores del diálogo no pueden ser solamente el gobierno y el FMLN-FDR, sino que "un diálogo para la pacificación es de tanta importancia que es necesario hacer participar a los diversos sectores de la vida nacional, por cuanto el conflicto bélico afecta a todos los salvadoreños."

De hecho, la resolución del secuestro de Inés Duarte pareció ir en favor de esta última línea de posiciones. Pese a las declaraciones de Duarte de que "dialogar con esta dureza, con este espíritu de revanchismo, es imposible," el intercambio de prisioneros acordado en Panamá y los compromisos verbales asumidos por las partes en orden

a la humanización del conflicto, constituyeron fácticamente la tercera ronda de diálogo que el FMLN-FDR había venido solicitando reiteradamente desde Ayagualo. El propio Rey Prendes admitió que los acuerdos de Panamá podrían ser "un eslabón importante hacia el futuro de las pláticas por la paz." El FMLN también lo consideró así. En sus primeras declaraciones, Nidia Díaz señaló que el canje evidenciaba que "cuando hay voluntad política de llegar a acuerdos se puede desarrollar. Nosotros seguimos creyendo que la solución al conflicto debe ser una solución política negociada," mientras que Héctor Oqueli manifestó que "la solución del caso de Inés Guadalupe demostró que mediante la negociación se puede llegar a un acuerdo; ahora es urgente que se reanuden los intentos de diálogo y negociación."

A nivel regional, en cambio, las perspectivas de distensión siguieron siendo marcadamente sombrías. Tras 5 días de discusiones, la reunión de plenipotenciarios de los países centroamericanos y del Grupo de Contadora, iniciada en Panamá en la primera semana de octubre, fue suspendida. Como se había anticipado, la piedra de tropiezo fue nuevamente la discrepancia de posturas entre el grupo de Tegucigalpa y Nicaragua frente al capítulo de la seguridad. Del lado de aquél, El Salvador rechazó la prohibición de permanencia y tránsito de tropas extranjeras por el área, pues "la constitución salvadoreña permite el libre tránsito de personas;" mientras que Honduras se mantuvo firme en su decisión de seguir realizando maniobras militares conjuntas con Estados Unidos. Frente a ello, Nicaragua advirtió que mientras persistiera la doble amenaza de "una fuerza de mercenarios pagada por la CIA" y la "agresión económica de Estados Unidos," no podía acceder a la reducción de su armamento, fundamentalmente de carácter defensivo.

Entrometiéndose en este clima de discusión, el presidente León Febres Cordero declaró el 9 de octubre que "mientras no se vaya a una legítima elección popular donde todo nicaragüense tenga derecho a autodeterminarse, va a existir una hoguera en toda Centroamérica." A ello añadió que "Contadora está llena de buenas intenciones," pero "todos los caminos que llevan al infierno también lo están," y advirtió que, como nuevo integrante del Grupo de Lima, Ecuador propondría un "nuevo enfoque" a la crisis centroamericana, que "quizá no sea del grado

de mucha gente." En reacción a las declaraciones y a la manifiesta y abusiva intromisión en los asuntos internos de Nicaragua que las mismas evidenciaban, el presidente Daniel Ortega comentó con tono mesurado que "Estados Unidos quiere ocupar al gobierno de Ecuador para que sirva como la manzana de la discordia en el grupo de apoyo a Contadora." A su vez, el canciller ecuatoriano, Edgar Terán, manifestó el 11 que "el gobierno de Ecuador rechaza de la manera más enérgica las declaraciones del comandante Ortega" por constituir una "grosera e inadmisibles ofensa a la dignidad, soberanía e independencia del Ecuador;" y anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua, que este país comentó como una decisión que "no responde a la voluntad del pueblo ecuatoriano, y más bien beneficia a los designios de Estados Unidos, dirigidos a frustrar el avance de la unidad latinoamericana y desatar una guerra generalizada en Centroamérica."

En otro flanco de ataques hacia Nicaragua, al finalizar el mes el presidente Duarte aprovechó su viaje a Estados Unidos para acusar a Managua de haber sido el "centro de operaciones" desde el cual el FMLN recibía las órdenes relativas a cada una de las fases del secuestro de su hija Inés Guadalupe, y del proceso de negociaciones para su liberación. Entre otros pasajes de un discurso marcadamente acusatorio contra el gobierno nicaragüense, Duarte denunció que "Nicaragua es la fuente centroamericana de totalitarismo y de violencia y es el santuario de los terroristas," recalcando que "innumerables personas en Centroamérica y en el caso de mi familia, mi hija Inés Guadalupe, no habrían sido víctimas de la despiadada violencia de los terroristas si éstos no tuvieran el apoyo, la dirección, la aprobación y la oportuna protección de la dictadura terrorista de Nicaragua," no obstante las declaraciones del diputado social-demócrata alemán Hans Jürgen Wischnewski sobre el "positivo papel en la solución humanitaria" del secuestro jugado por el gobierno nicaragüense.

Más que concitar el repudio internacional sobre Nicaragua sin embargo, las acusaciones de Duarte evidenciaron el profundo debilitamiento político de su gestión y la apremiante necesidad del respaldo político y los dólares norteamericanos para mantenerla a flote, aun al precio del servilismo y la calumnia.